

1222-S-03

(S.-1.222/03)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

MODIFICACION A LA LEY DE ESTUPEFACIENTES

Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 34 de la ley 23.737 por el siguiente:

Artículo 34: Los delitos previstos y penados por esta ley serán de competencia de la justicia federal en todo el país, a excepción de los que tengan relación con la venta y distribución de estupefacientes y que sean perpetrados dentro de jurisdicción provincial o de la ciudad de Buenos Aires, los que serán de competencia de la justicia penal ordinaria de las distintas jurisdicciones si no fueran de competencia originaria de la justicia federal.

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Mabel H. Müller.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

Los temas relacionados con el consumo y distribución de estupefacientes son un problema de difícil solución, a la cual podremos encaminarnos si todos los sectores de la sociedad colaboran y nos empeñamos en conjunto en lograrla. Día a día observamos como miles de jóvenes están siendo atrapados por diferentes adicciones basadas en el consumo de drogas de diferentes tipos y calidades.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires, en declaraciones recientes de sus funcionarios, admitió que en ámbitos escolares de la ciudad de La Plata se vende drogas a los estudiantes. Fuentes policiales informan que el 80 % de los menores que son detenidos por problemas penales consumen drogas, y que el 60 % de esos jóvenes y adolescentes están dentro del sistema educativo. Las autoridades reconocen que el consumo de drogas tiene relación directa con el incremento de la violencia escolar.

El aumento del consumo es incesante, y si bien no hay estadísticas concretas, hay indicadores que marcan este incremento: en el Cenareso (Centro Nacional de Reeducción Social) se reciben más de cien casos nuevos al mes. Podríamos mencionar también como indicador, la cantidad de droga que se incauta en las fronteras, especialmente de Bolivia y Paraguay, que este año ya superó los 398 kilos de cocaína y 3.320 de marihuana. Según informes de Gendarmería Nacional, se secuestra entre el 5 y 10 por ciento de la droga que entra al país y se sabe que cuanto más droga circula, más droga queda fronteras adentro. Otro indicador para tener en cuenta es lo informado por el cuerpo médico forense de la Corte de Justicia, cuando revela que cada 10 días hay un muerto por sobredosis en Capital Federal. Esto se descubre cuando se hace la autopsia ya que cada vez hay más cuerpos con cocaína aunque hayan muerto por otra causa.

Desde 1989 rige la ley 23.737 de tráfico y tenencia de estupefacientes que pena a quien vende y posee drogas, pero esta ley prevé que sea la Justicia Federal la que intervenga en estos temas. Todas las causas van a estos juzgados. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según el Foro de Estudios sobre Administración de Justicia (FORES) de las 23.000 causas que había en estos juzgados en 2001, 12.934 eran por drogas. En la provincia de Buenos Aires, estas variables se disparan, y el crecimiento del consumo trae aparejado un aumento no sólo en los delitos sino también en la violencia empleada en ellos.

Es alarmante el aumento del consumo por las consecuencias sociales que tiene como efecto. El empobrecimiento de los valores espirituales de las personas que son rehenes de las drogas, la alteración de los estados de ánimos, la depresión, la violencia, la desorientación, el abandono de la familia y los afectos, y el efecto tan temido de cruzar la frontera de la ley sin medir las consecuencias. Esto y mucho más podríamos decir en cuanto a los consumidores. Pero también es importante poner el acento en quienes no lo hacen, pero son un eslabón en la cadena de venta y distribución.

En la actualidad, como ya lo expresara anteriormente, está vigente la ley 23.737 que establece en su artículo 34 que los delitos penados por la misma son de competencia de la justicia federal. Es decir, la competencia de la justicia federal en esta materia no es originaria ni está contemplada taxativamente en los enunciados de la ley 48 que establece la competencia originaria de la justicia federal.

La mencionada ley establece que serán de competencia federal las causas que sean especialmente regidas por la Constitución Nacional, los tratados públicos con naciones extranjeras, las causas de civiles en que sean partes un vecino de la provincia en que suscite el pleito y un vecino de otra, o en que sean parte un ciudadano argentino y un extranjero, sobre todo hecho o contrato concerniente a la navegación y el comercio marítimo, contrabando, los

crímenes cometidos en el territorio de las provincias en violación a las leyes nacionales y que ofenden a la soberanía y seguridad de la Nación, los delitos electorales, falsificación de documentos nacionales o moneda nacional, secuestro de personas, y en general todas aquellas causas en que la Nación y en los crímenes de toda especie que se cometan en lugares donde el gobierno nacional tenga absoluta y exclusiva jurisdicción.

En el tema de drogas, la competencia de la justicia federal es asignada por la Ley de Estupefacientes. Entiendo que en estas causas, por la complejidad de delitos que abarca y porque generalmente produce efectos interjurisdiccionales, ya sea entre estados provinciales, o entre la Nación y otros estados nacionales, o por la calidad de los sujetos activos del tipo penal perseguido, no pueden ser sacados de la órbita de la competencia federal, pero creo firmemente que los delitos que se perpetren y que produzcan sus efectos dentro de los límites territoriales de los estados que integran la República Argentina y no sean de competencia originaria de la justicia federal (ley 48 de la Nación) deben ser de competencia de la justicia penal ordinaria de esos Estados.

Es por ello que, la modificación del artículo 34, que aquí se propone, no es para un cambio total de la competencia de la Justicia federal a la justicia penal ordinaria, sino un cambio parcial solamente para los delitos descritos precedentemente, lo que significa ampliar la capacidad de respuesta del estado en la lucha contra el terrible flagelo de las drogas.

Esta ampliación de la competencia traería como consecuencia inmediata que las fuerzas policiales de todo el país, más los juzgados criminales y correccionales, se sumen a la Policía Federal y la Justicia Federal, en la investigación, persecución, y penalización de los delitos que contempla la ley 23.737.

La avocación de los juzgados federales al conocimiento de las causas que tienen origen en la venta y distribución de drogas, al ser éstos sustancialmente minoritarios respecto de los juzgados penales y correccionales, hace que se torne de cumplimiento imposible la verdadera persecución del delito de la venta minorista de droga, ya que en su mayoría las tareas de inteligencia están dirigidas a operativos de gran envergadura relativos a detectar bandas organizadas de narcotraficantes y redes importantes de distribución.

Para este supuesto consideramos pertinente la competencia federal, ya que generalmente este delito involucra a componentes jurisdiccionales nacionales. Pero en el delito que involucra a los mencionados “kioscos” de venta de droga, que son detectados muchas veces por los vecinos de los barrios donde se establecen y que cada día son más, es muy difícil que pueda llegar a actuar la Justicia federal, porque estos sitios proliferan por todas las jurisdicciones provinciales, y en el caso de estados de gran desarrollo territorial con importantísimos asentamientos urbanos como el Gran Buenos Aires, con distritos con población que supera a muchas provincias argentinas, el combate se hace decididamente imposible. En diversas oportunidades, se solicita que se libren ordenes de allanamiento contra estos puntos de venta, que debido a la gran cantidad que existen, la demora en el libramiento de las mismas hacen que cuando éstas lleguen, ya se haya levantado el punto de venta, debido a que suelen cambiar de lugares.

La preocupación de la gente tiene que ver concretamente con ese tipo de venta, que se instala en los barrios y que contamina la vida cotidiana de los vecinos, involucrando indiscriminadamente a menores, estudiantes de colegios primarios y secundarios y adultos. El fin que trata de perseguir este proyecto es incorporar elementos de lucha contra esos puestos de venta que inciden directamente sobre la vida de la población de la mayoría de las provincias argentinas y de la ciudad de Buenos Aires, y que para la gente representa un peligro más concreto y letal, que la persecución de grandes bandas de narcotraficantes, que en definitiva aparecen en la vida de todos los días como un riesgo más mediato.

Señor presidente, ante innumerables pedidos a los representantes del pueblo por parte de importantes sectores sociales respecto de redoblar el esfuerzo en los temas referidos a la seguridad, este honorable cuerpo debe dar las respuestas que estén a su alcance, mostrando una vez más que se encuentra presente en los grandes temas que preocupan a los ciudadanos. Es por ello que se solicita el pronto tratamiento y sanción de este proyecto de ley.

Mabel H. Müller.

—A la Comisión de Justicia y Asuntos Penales.